

SANTIAGO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Comparece don Manuel Humberto Barraza Cubillos, cesante, RUT N° 8.228.219-K, de 59 años, con domicilio para estos efectos en Almirante Pastene N°185, Oficina 1002, comuna de Providencia, quien deduce demanda en procedimiento de aplicación general, por indemnización de perjuicios por enfermedad profesional en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO CHILE, RUT N°61.704.000-K, persona jurídica del giro de su denominación, representada judicialmente por su Presidente Ejecutivo conforme lo señala el Decreto Ley 1350 de 1976 en relación al Decreto 146 del Ministerio de Minería de 1991 y al acuerdo del Directorio N° 31-2014 de la empresa, don NELSON PIZARRO CONTADOR, ingeniero civil en minas, cédula nacional de identidad N°4.734.669-k, ambos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos N°1270, comuna y ciudad de Santiago, solicitando que la misma sea acogida en todas sus partes, en mérito de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expone:

Los Hechos. Señala que ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile el día 19 de junio de 1981, desempeñando sus funciones en el yacimiento minero división Salvador de la empresa, en distintas labores mineras como



señala más adelante. Desde el 19 de junio de 1981 hasta el 31 de agosto de 1983 se desempeña como jornalero en el interior de la mina subterránea del demandado, dichas labores consistían en ser el ayudante del maestro perforista en las labores de perforar y tronar las rocas por medio de explosivos. Refiere que ingresó completamente sano a la empresa, sin ninguna discapacidad auditiva o una exposición anterior a altos ruidos industriales.

Expone que las perforaciones se realizaban con una perforadora manual en la cual tenía que ir cambiando las barras para ir alargando la distancia del hoyo perforado, las barras median entre 2 a 8 pies. Estas perforadoras manuales trabajaban con agua y aire lo que provocaba un ambiente de trabajo de alta humedad, polvo y ruido. En ciertas ocasiones no se lograba la comunicación verbal ni visual con el maestro perforista sino hasta que se producía un descanso entre perforaciones. Lo complejo de esta labor era el área en que se desarrollaban estos trabajos, llamado "nivel de hundimiento", donde existe un alto riesgo del sector en el cual se carga o sienten los mayores esfuerzos del cerro que se explota (técnicamente llamada zona de transición) resultando en que en aquellos años la única forma de saber cómo se comportaba el cerro era escuchándolo, mirando si goteaban piedras del techo o paredes, y de suceder algo así, debía salir inmediatamente del área afectada debido a que el cerro estaba avisando que se quería "acomodar" (desprendimiento de rocas).



Cuando el cerro no lograba moverse por gravedad era porque una piedra de mayor tamaño estaba tapando la bajada de material, a ello se le llamaba zanja colgada, y en este caso debía procederse a colocar explosivos (dinamita, anfo y conos explosivos de diferentes tamaños). El procedimiento consistía en meterme adentro de la zanja y ver que parte quedo colgada la zanja y tratar de llegar a la roca con alguno de los explosivos que utilizaba para lograr que se soltara. Al terminar todos los hoyos a perforar, aproximadamente 32 hoyos de 8 pies cada uno (técnicamente llamados tiros) debía retirar sus herramientas a un lugar donde pensábamos que podría ser una zona segura y traer los explosivos para comenzar la labor de rellenar o cargar con dichos explosivos los hoyos perforados, utilizando para realizar la tronadura quemada, dinamita o anfo. Debía rellenar estos 32 hoyos con explosivos de forma manual, y ya cargados estos, procedía a poner una guía o mecha que debían prender con fuego, cuando se prendía la guía debíamos arrancar a resguardarnos a algún lugar que podría ser seguro de la proyección de piedras y ruido (onda sonora). Al quemar (explosión de la dinamita) se producía una onda expansiva muy alta, generando en lo inmediato un ruido muy fuerte que dejaba los oídos con zumbidos y una polución que no dejaba ver a medio metro de distancia. Los lugares seguros los definía el actor, según el tiempo que se demoraría en resguardarse antes de la explosión, según su apreciación de riesgo, y muchas veces por el tiempo



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

que se demoraba en llegar la guía al explosivo no podía buscar un lugar más lejano, sino que debía privilegiar que no le llegaran piedras proyectadas en vez de la onda sonora expansiva.

Sostiene que desde el 01 de septiembre de 1983 hasta el 28 de febrero de 1994 se desempeña en el cargo de metalero, en cual tenía que realizar variados trabajos, pero principalmente la operación de unos huinches manuales (maquinarias) que se utilizaban para extraer el mineral que caía por gravedad desde el cerro por una zanja, estos huinches provocaban que el material fuera a dar un nivel más abajo por una vertical, abajo se almacenada en unos silos de acopio. Estos huinches realizaban el trabajo que actualmente realiza una pala LHD (Load Haul Dump) pero en menor dimensión. Fue en esta época cuando refiere que comienza a sentir con mayor notoriedad la pérdida de la audición -que ya se manifestaba hace algún tiempo- escuchando con menos intensidad instrucciones verbales que se le entregaban y en el ámbito privado, en las conversaciones con su familia. Lo anterior se vio confirmado ya que en ese entonces tras su evaluación se dictó la Resolución N°221 de Compin Atacama, que el 15 de marzo de 1991 le diagnosticaba una pérdida auditiva de cerca de un tercio de su capacidad de ganancia total cuando llevaba apenas casi 10 años en la empresa.

A partir del 31 de diciembre de 1994 continuó desarrollando las labores de metalero ya relatadas,



con la diferencia que según la experiencia y comportamiento laboral logra optar al cargo de metalero especializado. Desde el 01 de enero de 1995 hasta el 31 de mayo de 1996, se desempeña en el cargo de operario, el cual consistía en ser parte de una cuadrilla de terreno al interior de la mina subterránea para realizar diferentes trabajos de servicios a la minería, según los requerimientos o necesidades de la explotación del yacimiento de propiedad de la demandada. En dichas labores subterráneas, se trabajaba bajo riesgo constante debido que debía entrar en lugares críticos donde se producían estallidos de rocas o planchones. En particular las funciones más habituales eran: - Realizar cargas de explosivos para tronadura de gran tamaño. - Realizar fortificación del cerro, el cual consistía en realizar perforaciones en el túnel para instalar mayas, pernos y luego sellar todo con shotcrete (hormigón proyectado). - Realizar reparación o mantenimiento de las parrillas de vaciado de material en nivel de producción y reducción. - Realizar trabajos de levante de cerro e instalación de muros de contención, instalación de vigas o marcos de sujeción de las zanjias o galerías. Con posterioridad y hasta el 31 de mayo de 1998, se desempeña como operador de martillo hidráulico en la tarea de reducción de rocas de mayor tamaño para que logran traspasar unas parrillas de selección de tamaño de material. Este martillo tenía una caseta al lado de la parrilla para resguardarse de la proyección de rocas al picar. Cuando el material ya



1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

no quería correr o se colgaba el material, debía instalar explosivos para lograr que el material siguiera escurriendo con normalidad mediante la gravedad. Este trabajo reporta alto ruido, debido a que se busca quebrar las rocas picándolas mediante fuertes golpes repetitivos con un martillo hidráulico de gran envergadura.

Continúa su relación señalando que, en el periodo comprendido entre el 01 de junio de 1998 hasta el 29 de febrero del año 2000, se desempeñó como operador de palas LHD (con capacidad de 7 yd³) y de igual forma continuó apoyando a las cuadrillas de apoyo a la producción en cachorro, largando zanzas o quemando tronaduras completas.

Finalmente, refiere que sus últimos años los desempeña como Operador Mantenedor calificado y especialista al interior de la mina subterránea, sin que en ningún momento se le trasladara a otro lugar en donde no estuviera expuesto a ruidos (la primera resolución que diagnostica el trauma acústico como enfermedad profesional se produce en el año 1991). Hasta el 31 de diciembre de 2011, época en la que termina el vínculo laboral con la empresa, siempre se desempeña en labores al interior de la mina subterránea con ambientes con altos contaminantes, polvo, gases y ruido.

Señala que nunca tuvo la opción de reubicarse a un lugar con un ambiente más cómodo o con menores niveles de contaminación acústica o de polución



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

hasta la fecha de su retiro. su jornada de trabajo semanal se dividía en 3 turnos, (A-B-C) en periodos de 8 horas. su remuneración promedio ascendía a la suma de \$660.880 más bonos relacionados con productividad y sobretiempo. Su vida laboral fue 30 Años y 6 meses al interior de mina subterránea del yacimiento División Salvador de propiedad de Codelco Chile.

Expone que su enfermedad fue diagnosticada, revisada y reevaluada mediante las resoluciones de la Compin Atacama N°221 de 15.03.1991; N°1343 de 27.09.1994; N°703 de 28.05.1997; N°2246 de 17.11.1999; N°3804 de 05.08.2009; N°1989 de 10 de abril de 2014 y Resolución N°B101/20140602 de fecha 24 de junio de 2014 de la COMERE (Comisión Médica de Reclamos).

Hechos posteriores al término de la relación laboral.

Debido a su discapacidad, en el año 2006 se le otorgó una pensión de invalidez parcial de \$231.308 pesos, por tener un porcentaje igual o superior al 40% e inferior al 70%, de incapacidad y que conforme a la normativa de la Ley 16.744 esta pensión debe ser igual al 35% del sueldo base.

A finales de 2011, las consideraciones que tuvo a la vista al momento de retirarme de Codelco fueron principalmente relacionadas con su salud, teniendo en cuenta que a esa fecha la pensión antes descrita podría ayudarlo a paliar el costo de su familia al



retirarse de la empresa y porque en ese momento se le había diagnosticado un aumento en el grado de la hipoacusia y una dolencia en su espalda que significaba inyectarse analgésicos constantemente.

Entonces al terminar la relación laboral con la empresa, con un 50% de discapacidad laboral diagnosticada por la Compin -en donde el mayor porcentaje estaba en relación a la disminución auditiva (Hipoacusia)- que había sido provocada por el único empleador que había tenido en su vida laboral, suscribe un finiquito por prestaciones laborales sin que en ese instrumento se le pagara suma alguna por concepto de la enfermedad profesional que padece.

Refiere que el año 2014 (encontrándose desvinculado de la empresa) la demandante sometió su caso a una reevaluación en la Compin Atacama resultado que el 10 de abril de 2014 bajo resolución exenta N°1989, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Atacama evaluó con un 50% de incapacidad por discopatía cervical y lumbar multinivel, síndrome dolor lumbar y cervical crónica secundaria e hipoacusia neurosensorial por exposición a trauma acústico crónico. No obstante lo anterior, su ex empleadora realizó una apelación a la resolución (sin que se le examinara en persona) situación de la cual no tuvo información (se encontraba en esa época viviendo en la ciudad de La Serena) pues nunca le fue notificada ni la apelación ni su resultado (las notificaciones fueron dirigidas al establecimiento



1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

minero donde ya no habitaba hace 3 años) sino hasta mucho tiempo después cuando dejaron de pagar su pensión por invalidez ordenando retroactivamente la devolución de la pensión pagada desde el año 2011.

Conforme la apelación realizada por Codelco el 24/06/2014 se determina invalidar la resolución N°1989, dictándose la Resolución N°B101/20140602 de fecha 24 de junio de 2014.

Expone que Codelco-Chile mantuvo hasta hace pocos años, los denominados "Planes de Egreso" que correspondían a desvinculaciones masivas especiales para trabajadores que tuviesen enfermedades profesionales diagnosticadas (como es el caso de silicosis) considerando sendas sumas indemnizatorias al momento de realizar los finiquitos de los trabajadores de la empresa.

Señala que le solicitaron que debía entregar el dinero de las cotizaciones de forma retroactiva desde 24/11/2011 al 31/08/2014, y fue entonces cuando se percata del contenido de la última resolución que fue apelada por Codelco en su calidad de empleador, pero que no se le notificó -como debió hacerlo- en su calidad de Administrador delegado del seguro (Codelco mantiene su ficha médica, y le son notificadas todos los resultados de todas las evaluaciones, reevaluaciones, revisiones, diagnósticos sobre enfermedades profesionales y todos los demás antecedentes relacionados en un periodo de más de 30 años).

Sostiene que la cancelación de la pensión de invalidez y la obligación a restituir casi tres años de la misma detonó en un desorden a la estructura de vida que había organizado con su familia para poder vivir tranquilos, ya que de haber previsto la situación a pesar de la pérdida de audición, no se hubiese retirado ya que a su edad y con la enfermedad que padecía, sería difícil encontrar trabajo en otra parte, lo cual efectivamente ha sido así, ya que si bien tiene la experiencia laboral en minería, ninguna empresa ni minera ni de otra industria ha querido contratarlo por padecer de hipoacusia (sordera) y aún le falta para poder obtener una pensión de vejez. Señala que a la fecha debe utilizar audífonos de forma permanente para poder paliar en algo su deficiencia auditiva (lo que se dificulta porque padece de tinnitus) lo cual le ha llevado a gastar demasiado dinero en comprarlos de manera particular y comprar las pilas para ellos.

Sostiene que se gasta 2 pilas a la semana del tipo 312 (\$4.000 el par) y no tiene ingresos para pagar ese insumo esencial para el audífono. Codelco Chile lo enfermó y no quiso hacerse cargo de su enfermedad profesional luego de entregar de manera ininterrumpida, 30 años de trabajo en su mina subterránea.

De cómo se desarrollaron los hechos que dieron motivo a la patología laboral antes descrita, surgiría de manera evidente que se ha incurrido en



una serie de faltas e infracciones a las medidas prevención y seguridad por parte de la demandada, pasando a plantear un cúmulo de observaciones en relación a la falta de condiciones seguras, que dieron pie a sufriera la patología auditiva crónica que padece.

Refiere que la empresa demandada, no tomó las medidas de carácter preventivo que debió haber realizado, a fin de que no sufriera la patología laboral que padece, la que se desarrolló de manera progresiva y durante el transcurso de varios años.

EL DERECHO. En cuanto a la oportunidad en la que se ejerce la presente acción de indemnización de perjuicios, debe tenerse en cuenta que la causa de pedir no ha sido otra que la del artículo 7° de la Ley N° 16.744, por lo que ha de aplicarse la regla extintiva del artículo 79 de esta legislación, conforme a la cual las acciones para reclamar las prestaciones por enfermedad profesional prescriben en el término de cinco años, contado desde el diagnóstico de la enfermedad profesional, y conforme se ha señalado en esta presentación se encuentra ejercida dentro de plazo desde la última resolución que determina su porcentaje de incapacidad por hipoacusia. No se debe olvidar que de acuerdo a un conjunto de normas como el artículo 58 de la Ley N° 16.744, artículo 88 del Código Sanitario, artículo 76 letra a) del D.S. N°101 y el artículo 4 del D.S. N°109, dispone que la declaración, evaluación y revisión de las incapacidades permanentes de una



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
enfermedad profesional serán de exclusiva
competencia de los Servicios de Salud a través de la
Compin.

De acuerdo a toda la normativa antes referida la declaración de una enfermedad, es en sí un acto administrativo, culmina con una resolución exenta emitida por la COMPIN, COMERE o SUSESO. Conforme a la normativa, una enfermedad profesional, nace y produce sus efectos jurídicos una vez dictada la resolución exenta, eso incluye el ejercicio de la acción establecida en el artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744, como es el caso de autos.

Daños y perjuicios. Daño emergente. Debido al daño que se ha producido en su cuerpo por el deterioro de éste, provocado por la lesión que se le ha inferido, ya que habría perdido en forma sustantiva su capacidad de oír, sus oídos han sufrido un daño irreparable, siendo este daño previsto y directo, he tenido que incurrir en gastos para poder subsanar en alguna forma la pérdida de audición, ya que de otra forma simplemente se encontraría socialmente aislado ya que no puede escuchar una conversación de manera normal sin tener puestos los dispositivos que se ha visto en la necesidad de adquirir (recetados medicamento).

Debido a su enfermedad ha tenido que pagar de su bolsillo una serie de audífonos para poder mejorar en parte su audición, resultando el último de ellos, un Audífono Retro auricular marca Phonak Modelo V30



3/2T cuyo costo al 17 de febrero de 2017 fue la suma de \$990.000. Para que el equipo pueda funcionar debe comprar semanalmente un par de pilas especiales para audífonos marca Duracell (u otra similar) DUR312 que desde la compra de su último audífono por un (periodo de 25 meses desde el 17.02.17) asciende a la suma de \$400.000.- Lo adeudado por este concepto asciende a la suma de \$1.390.000.- o el monto que conforme al mérito del proceso se estime.

Lucro cesante. Siendo el lucro cesante la ganancia legítima que una persona deja de percibir como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las obligaciones que le impone el contrato a una de las partes. Siendo un daño patrimonial, en su caso debe considerarse una serie de aspectos relevantes que determinaron las circunstancias en las que ahora se encuentra y que fueron resultado del actuar de la demandada. En primer lugar, los antecedentes que proporciona su enfermedad, diagnosticada por las entidades autorizadas para ello han significado que su afección le haya impedido trabajar, señalando que al momento de terminar la relación laboral con la empresa demandada tenía una pensión de invalidez parcial que 3 años más tarde del retiro de la empresa le fue invalidada, entonces:

a) el único ingreso que tenía en correspondencia con la enfermedad profesional que le produjo trabajar por más de 30 años para la demandada dejó de existir;



b) el periodo transcurrido significó que tuviese un vacío laboral de casi 3 años; y

c) conforme su experiencia en minería -relatada en esta presentación- ha resultado imposible que pueda conseguir trabajo en otra empresa, no solo por lo circunscrito de la industria en que me pueden servir los conocimientos técnicos que posee, sino mayormente por la enfermedad actualmente diagnosticada como aquella que durante 8 años si se consideró como patología de origen laboral, el lumbago crónico, que independiente del ajuste residual que se efectuó, significa que tendría un daño patrimonial permanente por toda su vida.

En segundo lugar, respecto de su remuneración, como parámetro válido de lucro cesante, en su último y único trabajo, tuve una remuneración promedio de \$408.759 más bonos por productividad variables, lo cuales por razones obvias hoy no podría obtener.

Sostiene que si bien, nada obliga a una empresa a mantener el mismo nivel de ingresos que un trabajador tenía en su anterior empleo y nada asegura que un trabajador vaya a mantener su nivel de ingresos por toda su vida laboral, no es menos cierto que en su caso se produjeron circunstancias con un alto grado de certeza que permiten establecer la procedencia del lucro cesante aquí solicitado, sobre todo considerando que de no haber estar aquejado en su salud lo más lógico es que no hubiera terminado su relación laboral con la empresa. En su



caso no solo se trata de considerar la última remuneración, multiplicada por la vida laboral, sino que el cálculo esta dado en relación a la pensión por invalidez que dejó de percibir (y que significaba un porcentaje de su remuneración efectiva) como un parámetro válido para fijar el lucro cesante.

Afirma que no es una mera expectativa lo aquí solicitado, ya que recibió, durante más de 8 años dicha pensión, que a la fecha del último pago (antes de que se le informara que debía devolverla) ascendía a la suma bruta de \$319.045. En este caso estaríamos en presencia de una situación en la que: a) tuvo un trabajo determinado; b) tuvo una remuneración determinada; c) una pensión por invalidez (que se otorgó por la enfermedad laboral diagnosticada) determinada; d) hay prueba de los organismos oficiales de que el alto porcentaje de incapacidad significo que durante 8 años se le pagó una pensión debido a que ha sufrido un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, a consecuencia de una enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales. Entonces, resulta que, situándose en diciembre del año 2011, en circunstancias de una política agresiva de la empresa para que se produjeran desvinculaciones, con sus enfermedades agravándose, su alternativa fue en ese minuto que la pensión de invalidez le ayudara a solventar los gastos después del retiro, hasta alcanzar la edad de jubilación conviviendo con la



existencia de la hipoacusia y los graves dolores lumbares que padece.

Para obtener el cálculo de lo pedido, estima que debe considerarse que el Instituto de Seguridad Laboral en el año 2014 que debía devolver los siguientes montos: a) pensión liquida cancelada indebidamente por el periodo del 24 de noviembre de 2011 al 31 de agosto de 2014: \$8424.358.-; b) aguinaldos cancelados por los meses de diciembre de 2011 a diciembre de 2013: \$80.805.-; c) las cotizaciones previsionales AFP Provida periodo 24 de noviembre de 2011 al 31 de agosto de 2014: \$1.193.432.-; y d) Las cotizaciones de salud en FONASA desde el 24 noviembre de 2011 al 31 de agosto de 2014: \$723.917, resultando un total de \$10.422.512.-

Entonces, conforme ofrece acreditar en su oportunidad, es posible configurar un monto que determine lo que se dejó de percibir utilizando los siguientes parámetros: a) el porcentaje efectivo de incapacidad en relación al porcentaje que obtenía de su remuneración mensual por pensión de invalidez, ya que cuando se le otorgó la pensión el 35% de su remuneración ascendía a \$231.308 lo que debe ser reajustado, resultando en que en la última pensión pagada el monto fue de \$319.045.- b) El tiempo que debe considerarse corresponde a aquel desde el término de la relación laboral hasta la edad en que podrá recibir su pensión por vejez (ya que sería imposible jubilarme anticipadamente al ser cesante y



1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

no poder cotizar) -dentro de 5 años más- ya que el pensionado de invalidez de la Ley N°16.744 que cumpla la edad legal para tener derecho a una pensión de vejez, dentro de su régimen de pensiones, dejará de percibir la pensión de invalidez de la Ley N°16.744, es decir ambas son incompatibles; b) la suma mensual que se le pagaba (y que se le pidió devolver) por el porcentaje de invalidez, equivalentes a un periodo entre noviembre de 2011 y agosto de 2014 (33 meses) -fecha en que tenía 55 años de edad-, esto es \$10.422.512 ; y c) los meses contados desde agosto de 2014 (fecha en la que dejo de percibir la pensión) al tiempo que le falta para obtener la pensión por vejez (117 a meses en mayo de 2024) ascendente a \$37.647.310.

Entonces desde noviembre de 2011 a mayo de 2024 (150 meses) por un monto mensual de \$319.045 (última pensión pagada en 2014) arroja como resultado un daño por concepto de lucro cesante ascendente a \$47.856.750.- por lo que solicita acceder a la suma pedida por este concepto o en su defecto el monto que se estime.

Daño Moral. En materia laboral, especialmente en cuanto al artículo 184 y siguientes del Código del Trabajo y de la Ley N° 16.744 y sus normas complementarias, el trabajador es el acreedor en materia de prevención y seguridad contra los accidentes y enfermedades profesionales, ya que es su integridad física y psíquica el bien jurídico protegido. En la especie, el perjuicio que sufre, se



traduce en lo siguiente: a) Ya no es una persona sana, sino con un alto grado de invalidez. b) La pérdida de capacidad de ganancia, que es la forma en que la invalidez se mide, es de un 37,5%. c) Tiene una pérdida irrecuperable en el nivel auditivo por una destrucción de las células en sus oídos internos. d) Ha perdido la capacidad de escuchar y entender el lenguaje hablado en frases en las condiciones habituales en que se desempeña en su trabajo o su vida social y familiar. e) Esta patología trae asociadas otras secuelas que afectan a los que sufren esta enfermedad profesional, y de las cuales también padece, como los "Tinnitus o atúfenos" bilaterales permanentes, que son ruidos tipo soplos o pitos contantes en ambos oídos que a veces no le permiten conciliar el sueño, y el fenómeno de "reclutamiento" que generalmente impide usar audífonos de manera adecuada. f) Sostiene que es un hecho científico médico que dentro de las secuelas que vienen asociadas a la hipoacusia se cuentan aquellas que afectan la psiquis, el ánimo y la sociabilidad en especial a las personas que si bien son personas con las ganas de trabajar y reintegrarse a la vida laboral, les será muy difícil encontrar trabajo por padecer de esta enfermedad, lo que suma padecimientos como la depresión, deterioro de la calidad de vida, deterioro cognitivo, alteraciones conductuales y del sueño, disminución de la actividad social, deterioro de la comunicación y alteraciones de la memoria. Afecta por tanto la capacidad psíquica, física y social, asociada al



déficit cognoscitivo, a los disturbios del humor y a los desórdenes del comportamiento (Guía Clínica N°56 "Hipoacusia Bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono", Ministerio de Salud, Chile, año 2007, pág. 10). g) En su caso, uno de los mayores problemas que padecería sería la irritabilidad, sobre todo por la dependencia del audífono, que muchas veces no cumple su función debido a la tinnitus asociada, generando un deterioro cognitivo de importancia en sus relaciones sociales. h) Ya no tiene el mismo grado de autonomía que tenía antes de la hipoacusia. g) Finalmente, y aparte de todo lo señalado, durante más de 8 años tuve diagnosticada enfermedad profesional por daño lumbar que hasta el día de hoy me produce mucho dolor al levantar cosas o por el solo hecho de agacharme a jugar con sus nietos.

La enfermedad profesional. Sostiene que padece una enfermedad profesional que le ha provocado una pérdida de su capacidad de escuchar por ambos oídos y de manera crónica, desde hace varios años a la fecha, en que tiene 59 años de edad. De acuerdo con la Ficha "Proteja sus Oídos" realizada por la Asociación Chilena de Seguridad, la sordera o enfermedades auditivas pueden producirse principalmente por cuatro factores: • Nivel de ruido • Tipo de ruido • Tiempo de exposición • Edad del trabajador De acuerdo con la naturaleza de las labores en minería que efectuaba, se encontraba expuesto a tres de los factores mencionados: nivel



excesivo de ruido, tipo de ruido y tiempo de exposición. Además, debe considerarse que a la edad a la que entra a trabajar a la empresa, esto es a los 22 años, se encontraba completamente sano sin que en su vida estuviese expuesto a otros ruidos que los de su trabajo en las dependencias de la demandada. El excesivo nivel y tipo de ruido que se produce en la minería subterránea, con maquinarias pesadas en constante transito al interior de los túneles, explosiones por dinamita, correas de chancadores de roca y martillos hidráulicos que funcionan ininterrumpidamente, evidencian que el ruido superaba todos los límites tolerables por el oído humano, y eso por más de 30 años de exposición al agente dañoso, es tiempo suficiente para provocar una enfermedad auditiva a cualquier persona. La enfermedad provoca en el actor un aislamiento social que se incrementa en el tiempo, sobre todo por la angustia de haber perdido su pensión (única fuente de ingreso que tiene su familia) pero manteniendo una enfermedad que se agrava cada día más y que tiene como único responsable al demandado.

Relación De Causalidad. En materia de enfermedad profesional, la autoridad administrativa, la Compin, debe establecer la relación de causalidad de acuerdo a toda una normativa legal, ya que no sólo el acto administrativo realizado por esta entidad, sirve para establecer que existe una enfermedad profesional, su pérdida porcentual de capacidad de ganancia, sino que además debe establecer el

1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

empleador donde se contrajo la enfermedad. Entonces, si me enfermó, fue porque no recibió por parte de la demandada todas las medidas preventivas o bien las que recibió no fueron eficaces para evitar que el riesgo del contaminante "ruido" provocara la enfermedad profesional que padece, porque de lo contrario no estaría enfermo.

Que esta totalidad de medidas preventivas implica cumplir con: a) Toda la legislación y normativa en prevención de riesgos laborales. b) Toda la normativa que importa el cumplimiento de las condiciones adecuadas de higiene industrial y seguridad en las faenas. c) Todos los implementos necesarios para prevenir esta patología profesional.

Refiere que tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se ha estimado que, la judicatura laboral es competente para conocer de las acciones indemnizatorias deducidas por el trabajador directamente afectado, ventilándose normalmente sus acciones a través del juicio ordinario del trabajo, invirtiéndose allí el peso de la prueba de la culpa, al entenderse que la sola ocurrencia de la enfermedad profesional implica incumplimiento al deber de protección u obligación seguridad, incumplimiento que a su vez se presume culpable atendido lo dispuesto en el artículo 1.547 del Código Civil.

Expone que no se adoptaron las medidas de seguridad adecuadas al tipo de faena en que se



desarrollaba y se le expuso al agente patógeno - ruido - que provocó la pérdida auditiva, no se le capacitó para precaver el riesgo de sufrir la referida pérdida auditiva y no se le hizo entrega de los implementos de seguridad adecuados, que fueran eficientes para impedir la patología laboral consistente en la pérdida auditiva que padece de por vida. Me desempeñe por más de 30 años realizando labores expuestas al ruido en un lugar confinado, lo que sin duda presenta con claridad la existencia del agente patógeno (sic), siendo una condición claramente riesgosa de causar patologías laborales, sin implementos de seguridad idóneos a las labores.

Tal y como se desarrollaron los hechos que dieron motivo a la patología laboral que padece, surge de manera evidente que se ha incurrido en una serie de faltas e infracciones a las medidas de prevención y seguridad por parte de la demandada, pasando a plantear un cúmulo de observaciones en relación a la falta de condiciones seguras, que dieron pie a sufriera la patología auditiva que mantiene.

Culpa Del Deudor. Respecto del tipo de obligación y culpa de que responde el empleador, señala lo siguiente: a) Que como ha dicho la Jurisprudencia, en numerosas ocasiones, el empleador es deudor de la obligación de evitar las enfermedades profesionales de sus empleados. b) Que la obligación de seguridad que pesa sobre el empleador respecto de sus trabajadores, previstas en



los artículos 184 y siguientes del Código del Trabajo, obligan al primero a emplear la diligencia propia de un hombre esmeradamente cuidadoso, haciéndole responder de culpa levísima. Incumplimiento del empleador

En esta materia, armonizando el artículo 184 del Código del Trabajo y 1547 del Código Civil, concluye que en la responsabilidad contractual el incumplimiento de las obligaciones se presume, de manera que al que reclama dicha responsabilidad sólo le incumbe probar la existencia de la obligación, pero no debe acreditar que el incumplimiento de ésta que sea culpable (Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 242-2007, 30 de julio de 2007).

Releva que, el lugar donde me desempeñaba era un lugar que presentaba elementos ruidosas maquinarias y procesos, toda vez que consistía en ejercer labores de minería extractiva sin el uso de mayores tecnologías en la profundidad del cerro, existiendo una serie de elementos y condiciones inseguras al trabajar, sin protección auditiva adecuada.

En segundo lugar, la empresa demandada, no toma medidas de carácter preventivo alguno, (considerando que además era el Administrador Delegado del Seguro) a fin de que no sufriera la patología laboral, no se implementó un sistema de trabajo seguro, acorde a las labores a realizar, ya que se le expuso a una situación insegura, sin advertir o minimizar los riesgos de trabajar en esas condiciones, provocando



en suma una pérdida irreversible de su capacidad auditiva, de trabajo y social de por vida.

La presunción conlleva una inversión del peso de la prueba ya que el empleador que pretende liberarse de responsabilidad deberá probar haber dispuesto las medidas de seguridad adecuadas para, de este modo, entender cumplido el deber de diligencia exigido por la ley (sentencia antes señalada en concordancia con sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 3143-2009, 07 de julio de 2009). Esta es una obligación tan perentoria como extrema (de cumplir con la totalidad de las medidas preventivas), que cualquier omisión importa desobedecer el deber que incumbe al empleador (última. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° 179-2007, de fecha 17 de agosto de 2007). Agrava más la presunción de la culpa que pesa sobre el empleador demandado el hecho que la sola ocurrencia de la enfermedad profesional implica incumplimiento al deber de protección u obligación de seguridad, el agravamiento se debe a que esta enfermedad profesional se produjo porque la demandada no tomó todas las medidas de protección o si se tomaron, estas no fueron eficaces. Nunca se tomaron las medidas conducentes a evitar el agravamiento de la enfermedad ya diagnosticada y nunca se le traslado de lugar de trabajo en que no se encontrara expuesto a las elevadísimas cantidades de ruidos que hasta el día de hoy existen en el yacimiento minero de la demandada.



Entendiendo el daño moral como la lesión inmaterial o agravio inferido por un sujeto al derecho subjetivo inherente a la persona de otro sujeto, conforme con nuestra jurisprudencia, importaría un daño moral indemnizable: los dolores, sufrimientos, aflicciones, preocupaciones, depresiones y molestias inferidas a la víctima.

Este daño consiste en los dolores y angustias experimentados, y el tribunal deberá regularlo, atendiendo la cantidad del mal que ha debido soportar. Si bien es difícil cuantificar el daño moral sufrido a consecuencia de una enfermedad profesional, no es menos cierto que de acuerdo con nuestra legislación el daño moral es indemnizable. En mérito de lo anterior, por concepto de daño moral propiamente tal y atendido el estado físico y psicológico que le provocó y continúa provocando la enfermedad profesional a su persona, demando la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) o la que se estime conforme al mérito de los antecedentes.

Interés y Reajustes. Se demandan intereses y reajustes desde la fecha de diagnóstico de la enfermedad, hasta el día del pago efectivo, o por el periodo que conforme a derecho se establezca, en razón con la regla establecida en el artículo 63 del Código del trabajo, que es la norma aplicable en este ámbito. El interés aplicable es el máximo convencional, y el reajuste es el correspondiente a la variación que experimente el Índice de Precios al



Consumidor, desde la fecha de diagnóstico de la enfermedad profesional.

Por lo expuesto, pide tener por interpuesta demanda por indemnización de perjuicios por enfermedad profesional en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO CHILE, RUT N°61.704.000-K, persona jurídica del giro de su denominación, representada judicialmente por su Presidente Ejecutivo conforme lo señala el Decreto Ley 1350 de 1976 en relación al Decreto 146 del Ministerio de Minería de 1991 y el acuerdo del Directorio N° 31-2014 de la empresa, don NELSON PIZARRO CONTADOR, ambos ya individualizados, y condenar a la parte demanda a las sumas y conceptos ya expresados.

SEGUNDO: Comparece doña MACARENA GARRI FUENTES, Abogada, en representación de la demandada CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, CODELCO-CHILE, quien contesta la demanda dentro de plazo legal solicitando el total rechazo de esta, conforme a los fundamentos de hecho y consideraciones de derecho que expone:

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA Sin perjuicio de que se niegan expresamente todos los hechos, los supuestos fácticos, los fundamentos de derecho en que se basa la demanda y sus pretensiones, invoca la prescripción extintiva de cualquier acción que tenga por objeto resarcir perjuicios por daños del



demandante por encontrarse en el caso que dispone el artículo 79 en relación con el artículo 58 y siguientes de la Ley N°16.744.

Sostiene que el párrafo 3° del título Prescripción y sanciones dispone en el artículo 79 "Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad."

De acuerdo a lo anterior, el legislador reconoce a las personas que están sujetas obligatoriamente a un seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el derecho a ejercer las acciones destinadas a reclamar de las prestaciones que se deriven por haber sufrido un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, y les establece un plazo, señalando como inicio la fecha o el diagnóstico que corresponda con el fin de conocer evidentemente el día en que comienza a correr el plazo para ejercer la acción, (1) a contar del accidente ocurrido; (2) a contar desde la enfermedad diagnosticada.

Así, existe una regla general y una excepción, siempre considerando si se trata de un accidente o de una enfermedad. La regla general es que, tratándose de un accidente, o tratándose de una enfermedad, el plazo para ejercer las acciones es de 5 años, desde la fecha del accidente, o desde el



1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

diagnóstico de la enfermedad, de carácter laboral. La excepción a esta regla la considera para los casos especiales de la neumoconiosis, que corresponden a enfermedades del aparato respiratorio, cuyo plazo para ejercer la acción es de 15 años, desde que fue diagnosticada. Por otro lado, para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en categorías según los efectos que produzcan: (a) que producen incapacidad temporal; (b) que producen invalidez parcial; (c) que producen invalidez total; (d) que producen gran invalidez; y (e) que producen la muerte.

En el caso de las incapacidades permanentes se requiere que sean declaradas por el organismo competente. En armonía con lo anterior en el Título VI "Evaluación, revaluación y revisión de incapacidades" el artículo 58 de la citada ley dice "la declaración, evaluación, revaluación y revisión de las incapacidades permanentes serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud. Sin embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación, revaluación y revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo corresponderá a estas instituciones".

Por su parte el Reglamento N°109/1968 para la Calificación y Evaluación de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales dispone en el



artículo 4º que los Servicios de Salud competentes serán las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o las Mutualidades para el caso de accidentes del trabajo. Como se desprende de lo previamente citado, el artículo 58 habla de declaración y evaluación de las incapacidades permanentes, el artículo 79 utiliza el concepto de diagnóstico para establecer que existe una enfermedad. Para determinar la existencia de una enfermedad de carácter profesional es de competencia exclusiva de la COMPIN; En cuanto a los conceptos utilizados, si bien el legislador no ha definido en la Ley N°16.744 qué es diagnóstico; declaración, evaluación; revaluación; o revisión, son las normas de interpretación de la ley del Código Civil ubicadas en el Título Preliminar, las que deben considerarse al tiempo de determinar desde cuándo una persona padece de una enfermedad profesional, cuestión esencial que fija el inicio del cómputo del plazo de 5 o 15 años para hacer valer la acción y demandar por su padecimiento. Pues bien, aplicando el artículo 19 del Código Civil los conceptos de la Ley N°16.744 deben interpretarse en su sentido natural y obvio. Para ello, la Real Academia Española define el concepto diagnóstico: que proviene de la "acción y efecto de diagnosticar"; en medicina "determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos". A mayor abundamiento, el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia de la Lengua Española, define que el diagnóstico es la "identificación de la



existencia o no, de una enfermedad a partir de los síntomas y signos clínicos, para determinar un padecimiento o condición clínica, auxiliándose para ello, en caso necesario, de estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento". De acuerdo a lo anterior el sentido natural y obvio para determinar que el demandante padece de una enfermedad profesional tuvo que ser: (1) diagnosticado mediante el examen de sus signos y (2) del resultado del examen, el Servicio de Salud competente (en estos casos la COMPIN) debió declarar la existencia o no de la enfermedad profesional. Lo dicho tiene directa relación con el artículo 58 de la citada ley, pues para que el diagnóstico de la enfermedad fuere de carácter profesional y pudiese determinarse, requirió de la intervención de la COMPIN de la región competente, así la declaración de la hipoacusia pasó a tener el carácter de incapacidad permanente según la clasificación y graduación que el reglamento N°109/1968 establece para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, asignando un porcentaje determinado por el médico especialista del Servicio de Salud respectivo. En otras palabras, y siguiendo el sentido lógico de lo expuesto, se requiere del diagnóstico para determinar la existencia de una enfermedad; luego de la declaración del Servicio de Salud respectivo para emitir resolución declarando que dicha enfermedad es profesional. Sólo con dicha resolución comenzará a computarse el plazo de 5 años para que el demandante pudiese accionar en contra



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

del que considere responsable. Aclarando la diferencia entre estos conceptos, debe despejar si existe un segundo o ultimo diagnóstico, o bien se trata de una reevaluación del porcentaje de incapacidad inicial declarado; y en efecto se trata de un diagnóstico y declaración de hipoacusia de fecha 15 de marzo de 1991 declarado por Resolución N°221 de la Comisión Medica Preventiva de Invalidez del Servicio de Salud de Atacama ponderando un 30% de incapacidad del actor por hipoacusia y posteriores reevaluaciones de fechas 27 de septiembre de 1994, resolución N°1343; 28 de mayo de 1997, resolución N°703; 17 de noviembre de 1999, resolución N°2246; 05 de agosto de 2009, resolución N°3804, 10 de abril de 2014, resolución N°1989, efectuadas por la misma institución y que reiteran la existencia de incapacidad por hipoacusia; y de fecha 4 24 de junio de 2014, resolución N°B101/20140602, de la Comisión Médica de Reclamos, que pondera un 37.5% de incapacidad al actor.

Sostiene que lo anterior permitiría concluir que la resolución de la COMPIN en que funda su pretensión del demandante, no es de declaración o diagnóstico, sino que tiene el carácter de reevaluación, pues como se ha expuesto, la Resolución que declara o diagnostica la enfermedad es una sola y ella corresponde a la Resolución N°221 de la COMPIN de Atacama de fecha 15 de marzo de 1991, ya que ésta determina la existencia de la enfermedad.



Debe recordarse que el Título VI de Evaluación, Revaluación y Revisión de Incapacidades de la Ley N°16.744, señala que las resoluciones del Servicio de Salud una vez que diagnostican, declaran y evalúan una enfermedad profesional pueden dictar nuevas resoluciones de revaluación o revisión.

Así, el inciso primero del artículo 61 dice que "si el inválido profesional sufre un nuevo accidente o enfermedad, también de origen profesional, procederá a hacer una revaluación de la incapacidad en función del nuevo estado que presente". Luego, en el inciso primero del artículo 62 señala que "procederá, también, hacer una revaluación de la incapacidad cuando a la primitiva le suceda otra u otras de origen no profesional".

Ahora bien, tratándose de revisiones, el artículo 63 dispone "las declaraciones de incapacidad serán revisables por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones, o se aumentará o disminuirá su monto. La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado, en la forma que determine el reglamento". Siguiendo el claro sentido de la ley, un Servicio de Salud puede (1) declarar una incapacidad, a raíz del diagnóstico y evaluación que se haga en virtud de lo que la ley y su reglamento establezcan; (2) revaluar una declaración de incapacidad por existir nuevo accidente o enfermedad de origen o no profesional, y; (3)



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

revisar una declaración de incapacidad porque se ha experimentado una agravación o mejoría o porque se ha incurrido en un error en el diagnóstico. Pues bien, en virtud del artículo 58, la hipoacusia fue diagnosticada y declarada como enfermedad profesional hace 28 años, plazo contabilizado entre la fecha de la primera resolución y la fecha de la notificación de esta demanda. En específico, lo único que varió desde la resolución de diagnóstico hasta la resolución de la COMERE citada en la demanda, es el porcentaje de incapacidad, es decir, no varió la determinación de la existencia de la enfermedad profesional. Así las cosas, no existe fundamento jurídico, disposición legal, sea ley especial o general, ni reglamento alguno que señale que por cada agravamiento o mejoría se considerará una nueva enfermedad y por ende un nuevo diagnóstico del cual derive un nuevo inicio del plazo de 5 años para poder accionar y demandar las prestaciones e indemnizaciones que la Ley N°16.744 establece. La distinción de las resoluciones de declaración, revaluación y revisión, no es antojadiza y tiene su fundamento en la propia Ley N°16.744, y en todas las consideraciones que expone, por lo que no puede ser obviada al tiempo de conocer y fallar esta excepción.

En consecuencia, el diagnóstico de la COMPIN que determinó que el actor estaba aquejado de hipoacusia se contiene en la resolución N°221 de fecha 15 de marzo de 1991. Si se cuentan los 5 años desde esa



fecha, éstos se cumplieron el 14 de marzo de 1996, es decir, hace 23 años al tiempo de esta contestación. Dicho de otro modo, entre el diagnóstico y la fecha de la presente demanda han transcurrido 28 años.

Por lo expuesto, pide acoger la excepción de prescripción que se opone, dado que entre la fecha de la resolución de la COMPIN que diagnosticó la existencia de la enfermedad de hipoacusia y la fecha de la demanda y su notificación, transcurrió en exceso el plazo de 5 años, con costas.

EN SUBSIDIO, CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. NEGACIÓN EXPRESA DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Dicha defensa niega expresamente todos y cada uno de los hechos, fundamentos de derecho y pretensiones contenidos en la demanda, en consecuencia: 1.- Niega expresamente que durante el período en que el demandante prestó servicios para su representada, haya ejecutado labores expuesto a índices ilegales de ruido y que ésta no haya adoptado las medidas de seguridad y protección necesarias para protegerlo de la enfermedad que lo aqueja; 2.- Niega expresamente que las condiciones ambientales al interior de las obras de su representada sean deficientes o que no existan sistemas de protección adecuados y eficaces; 3.- Niega expresamente que su representada no haya tomado las necesarias y suficientes medidas de prevención y seguridad tendientes a minimizar el riesgo de daño auditivo; 4.- Niega expresamente la falta de fiscalización en el uso de los elementos de



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

protección personal de los trabajadores; 5.- Niega expresamente que el actuar de su representada haya sido negligente; 6.- Niega expresamente que su representada no haya implementado diversas medidas y acciones preventivas y de mitigación del ruido; 7.- Niega expresamente que haya incumplido las garantías constitucionales, leyes, decretos y reglamentos indicados en la demanda; 8.- Niega expresamente que su parte haya incumplido las normas que le establece el deber de protección que obliga al empleador, conforme al artículo 184 del Código del Trabajo; 9.- Niega expresamente que haya incumplido las disposiciones de la Ley N°16.744 y sus reglamentos; 10.- Niega expresamente que sea responsable por la enfermedad profesional que padece el demandante en los términos propuestos en la demanda; 11.- Niega expresamente que su representada sea responsable del daño moral que se demanda; 12.- Niega expresamente que su representada sea responsable del daño emergente y lucro cesante pretendido; 13.- Niega expresamente que tenga derecho de ser indemnizado en las sumas que pretenden o en otra que se determine.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Contestando derechamente la demanda, precisa que el hecho fundamental del juicio consiste en que el demandante se encuentra afectado por hipoacusia, enfermedad laboral diagnosticada por la Resolución N°221 de fecha 15 de marzo de 1991, de la COMPIN de Atacama, y que tal enfermedad la habría adquirido en su calidad de trabajador de Codelco-Chile. a) Debido



ejercicio del deber de cuidado y de la enfermedad de Hipoacusia. Debe tenerse en consideración en primer lugar que su representada ha ejercido diligentemente su deber de cuidado, con la aplicación de medidas preventivas, tanto en el uso de los equipos de seguridad; medidas de control de ruido, programas de vigilancia de la salud, capacitación y difusión de un protocolo de exposición al ruido, entre otros. Dicho aquello, la hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva. Esta pérdida puede ser desde leve o superficial hasta moderada, y se puede dar de manera unilateral o bilateral dependiendo de que sea en uno o ambos oídos. En este caso el demandante tuvo diagnóstico y declaración de enfermedad profesional auditiva, en el año 1991, cuyos exámenes determinaron que padecía de la afección de Hipoacusia, según resolución N°221 de la COMPIN de Atacama, que determinó un 30% de grado de incapacidad. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, es preciso señalar que no necesariamente puede deberse a una exposición al ruido relacionado de manera directa a las funciones que realizaba como trabajador de Codelco. El grado de incapacidad que determinó la COMPIN sólo señala el tipo de enfermedad más bien no explica la relación causa-efecto, en consecuencia, es preciso conocer cuáles fueron las circunstancias que existían al tiempo de que el actor fue evaluado, pues considerando su edad, su desvinculación como trabajador de su representada, y los últimos antecedentes médicos, el resultado puede deberse a un deterioro natural o a



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

estudios audiométricos incompletos. Cabe señalar que el actor, en su vida laboral, en el supuesto caso de haber estado expuesto a ruido industrial, este no fue permanente ni habitual, considerando que, de acuerdo a las funciones desempeñadas, las jornadas de trabajo el ruido pudo ser con diversos grados de intensidad y tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, todo el tiempo su representada otorgó los elementos de protección personal adecuados, y de la máxima tecnología disponible en el mercado para los efectos de evitar dicha patología, capacitando y supervisando el correcto uso de los mismos. Según el artículo 75 del Decreto Supremo N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, establece que la exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante debe ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador pueda estar expuesto a un nivel de presión sonora continuo equivalente a 85 decibeles, medidos en la posición del oído del trabajador. Es del caso señalar que la norma legal establece que, si los niveles de presión sonora fueran superiores a 85 decibeles, se requiere de protección auditiva, lo que sí tuvo el actor. Considerando los decibeles a los que puede estar expuesto una persona, no se desprende siquiera de la demanda algún otro antecedente que diga si durante todos los años que trabajó para Codelco, la exposición al ruido fuere de la misma magnitud, inferior, igual o superior a los decibeles



aceptados. Según las funciones desarrolladas no se desprenden antecedentes que permitan entender los tiempos de exposición al ruido, los niveles del mismo, y los mecanismos de prevención que se aplicaron. La hipoacusia como enfermedad podría deberse a otros elementos que no digan relación con el lugar de trabajo en el que se desempeñó, por distintos factores, dependiendo si esta es congénita, heredada o adquirida. Si se tratara de una hipoacusia adquirida, ésta también puede deberse a múltiples factores, como serían la exposición a ruido no laboral; traumatismo; medicamentos que dañen el canal auditivo; utilización de audífonos para escuchar elementos de reproducción musical a niveles superiores a los permitidos, actividades de caza, o por deterioro progresivo de la edad, pues el actor tenía 32 años cuando fue evaluado y actualmente tiene 60 años de edad. No se puede descartar entonces que existan otros elementos que hayan influido en el desarrollo de esta enfermedad, por lo que corresponde al demandante comprobar que la pérdida auditiva se produjo específicamente por haber realizado funciones con exposición al ruido en decibeles mayores a los permitidos, y sin protección auditiva. En todo caso, su representada en cumplimiento de lo que el legislador le ordena tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y vida del demandante: 1. Le entregó los elementos de protección auditivos (EPA); 2. Instruyó al trabajador mediante charlas; 3. Fiscalizó el uso correcto de los EPA; 4. Entregó la



información y lo derivó a la institución competente para que fuera evaluado por audiometría por ruido ocupacional, etc. Debe tenerse en consideración que su representada ha ejercido diligentemente su deber de cuidado, con la aplicación de medidas preventivas y en el uso de los equipos de seguridad, además informa, previene y protege a sus trabajadores de la exposición al ruido industrial.

Improcedencia de la demandada en cuanto a la responsabilidad perseguida. Inexistencia de relación de causalidad. Sin perjuicio de todo lo ya expresado, no debe olvidarse que el demandante terminó su relación laboral con su representada en conocimiento de su diagnóstico de hipoacusia. En razón de ello pudo obtener indemnizaciones por tal padecimiento. Así las cosas, no debe soslayarse el hecho que el demandante dejó de prestar servicios en el año 2011, según reconoce en su escrito de demanda, y que hasta esa altura su enfermedad le reportaba incapacidad. Entonces, al contrario de lo que señala el actor, no puede dejarse de lado la posibilidad de que haya prestado servicios en otras labores, para otros empleadores en que el riesgo de exposición a ruido se encuentre presente. En este sentido, no basta la declaración del actor en su demanda señalando que no desempeñó labores mineras ni otras con exposición a ruido con posterioridad al término de la relación laboral que lo ligaba con su representada. Aun en ese escenario, haya o no prestados servicios para otros empleadores no hay



relación de causalidad entre la variación de su incapacidad, la pérdida de su pensión de invalidez y la responsabilidad que se le imputa a su representada. Reafirma lo anterior que el demandante a la fecha del término de la relación laboral aún se encontraba en condiciones de trabajar hasta optar a su pensión por cumplimiento de la edad de jubilación. En estos años, perfectamente pudo haber laborado en faenas u otros trabajos en donde el riesgo de exposición al ruido se encuentre presente. Además, no puede imputar responsabilidad a Codelco-Chile debido a que, en el año 2014, con posterioridad al término de la relación laboral se excluyera de su porcentaje de incapacidad el lumbago crónico por tratarse de una enfermedad de origen común, y consecuentemente perdiera su pensión de invalidez. En efecto, la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social ante la apelación realizada por el demandante de la resolución de la COMERE que determina que la patología de columna que presentaba era de origen común y no laboral, disminuyendo su porcentaje de incapacidad laboral, no es atribuible a responsabilidad de ningún tipo respecto de su representada. La responsabilidad requiere causalidad entre el daño alegado y el agente. Lo aquí reclamado como daño es la disminución del porcentaje de incapacidad del actor y consecuente pérdida de pensión de invalidez, derivado de la decisión de los organismos de salud pertinentes en la materia y no reprochable a la responsabilidad de su representada,



quien no ha tenido relación con el actor por más de 8 años.

No procede responsabilidad indemnizatoria alguna. En el caso de autos, no cabe responsabilidad indemnizatoria alguna. Si se toma como base que el diagnóstico de hipoacusia y la resolución de la COMPIN fue en el año 1991, ello significó que desde ese momento comenzó a percibir las prestaciones médicas y pecuniarias que la ley N°16.744 otorga al enfermo profesional. Es decir, se le otorgaron las prestaciones pecuniarias que correspondían a su porcentaje de incapacidad. Como su representada tiene el carácter de Administradora Delegada del seguro de la ley en comento, en cumplimiento a dicha normativa, tales prestaciones fueron otorgadas con cargo al seguro y por ende sin costo para el demandante. Desde que ha sido diagnosticado con hipoacusia, el pago de las prestaciones se encuentra vigente y protegido, por lo que no se desprende perjuicio alguno que deba indemnizar su representada, en consecuencia, no es posible comprender, sostener ni justificar la procedencia de la pretensión indemnizatoria de autos, más aun cuando se basa en una cantidad de dinero exagerada y fundada principalmente en que debe realizar la devolución de dineros obtenidos por una patología lumbar que fue considerada de origen común. De acuerdo al artículo 79 de la ley 16.744, y conforme a la reiterada jurisprudencia, lo que establece el daño es el diagnóstico de la enfermedad profesional.



Es decir, lo que determina la existencia de hipoacusia es el acto médico contenido en la resolución que indica que el trabajador padece de enfermedad profesional, señalando el porcentaje de incapacidad, entonces sólo ahí nace el perjuicio. El artículo 69 de la ley 16.744 alude al accidente del trabajo o enfermedad profesional causado con culpa o dolo del empleador o del tercero, como causa para reclamar las otras indemnizaciones a las que tenga derecho, incluyendo el daño moral, con arreglo al derecho común. Luego el derecho de demandar nace con el diagnóstico. Cabe tener presente que, al tratarse el daño emergente, lucro cesante y daño moral, de instituciones civiles, se debe estar a sus normas para la eventualidad de su procedencia, en consecuencia, debe ser el propio actor quien debe acreditar el derecho y los hechos que amparan su pretensión y su monto.

En cuanto a la acción indemnizatoria: Ausencia de acción u omisión culposa que cause el daño. Además de los argumentos jurídico-procesales que hacen improcedente la demanda de autos, los hechos señalados por el demandante no son efectivos y en consecuencia no concurren los elementos que la ley exige para la interposición de una acción indemnizatoria según se explica a continuación.

No existen la acción u omisión necesaria para la acción indemnizatoria. En efecto el actor funda su acción en la violación del deber de cuidado y protección de su presentada, el cual según se



acreditará no ha sido vulnerado. De todas maneras, el actor no señala que acción u omisión habría incurrido Codelco para los efectos de incumplir con su deber de cuidado y protección, sólo se limita a indicar en forma general el incumplimiento de dicha obligación y a que su parecer las medidas de seguridad adoptadas no habrían sido suficientes, pues en la efectividad de haberlo sido no padecería de una incapacidad por hipoacusia. Por ende, no existiendo ninguna acción ni omisión culpable, ni menos dolosa de su representada la que opera con estándares de seguridad de nivel internacional, contando siempre con las últimas tecnologías y equipos disponibles en el mercado para la protección tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de las empresas contratistas, mal se puede sostener su responsabilidad contractual indemnizatoria. Se debe tener presente que para los efectos de poder atacar la responsabilidad que se le atribuye a Codelco-Chile en los hechos, aun cuando la tendencia jurisprudencial es igualar el deber de protección del empleador a la culpa levísima, dicha responsabilidad no se debe entender como equivalente a que el empleador deba responder de todo daño. En efecto, es del caso que la norma contenida en el artículo 69 de la ley 16.744 exige para la procedencia de las indemnizaciones por enfermedad profesional, el autor del daño debe haber actuado con dolo o culpa. A su vez, la culpa levísima exige al sujeto obligado a actuar con aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

administración de sus negocios más importantes. En los hechos, todas las acciones y políticas de prevención que se acreditarán en su oportunidad, son útiles para demostrar que Codelco ha actuado y actúa, siempre con esmerada diligencia, que es aquella propia del deber de protección. Y actuando de ese modo no podría ser responsable de las indemnizaciones reclamadas. Sin perjuicio de ello, cabe tener presente en este punto que de todas maneras cualquier riesgo laboral se encuentra cubierto y amparado por el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y cuya finalidad es, precisamente bajo los criterios de responsabilidad objetiva, atender los siniestros propios del ámbito laboral. En consecuencia, acreditando que Codelco ha obrado con esmerada diligencia y cuidado exigido, es perfectamente posible alegar que no procede indemnización alguna pretendida en el presente litigio.

Los perjuicios reclamados. El actor señala que en virtud de los diferentes incumplimientos de su representada a las disposiciones legales que cita, se produjo la enfermedad profesional que le aqueja con un 37.5% de pérdida de ganancia. Por ello solicita las siguientes indemnizaciones: por daño moral la suma de \$50.000.000, lucro cesante la suma de \$47.856.750 y daño emergente por \$1.390.000.- Si bien es cierto que la jurisprudencia ha asimilado el deber de protección a la culpa levísima, no debe entenderse dicha responsabilidad como equivalente a



la responsabilidad objetiva en virtud de la cual el empleador responde de todo daño, desde el momento que el artículo 69 de la Ley N°16.744 dispone que las acciones indemnizatorias que se interpongan por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales se someten a las prescripciones del derecho común, separando así la culpa objetiva, propia de la ley señalada, de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual. El propio artículo 69 antes citado exige que para que haya lugar a las indemnizaciones por dicha causa, el autor del daño debe haber actuado con dolo o culpa. A su vez, la culpa levísima exige al sujeto obligado a actuar con aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.

En autos, todas las acciones y políticas anteriormente descritas demuestran que su representada actúo para con el demandante con dicha esmerada diligencia, propia del deber de protección. Y actuando de ese modo no puede ni debe ser responsable de las indemnizaciones pretendidas, más aún cuando el riesgo laboral se encuentra cubierto y amparado con un seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y cuya finalidad es, precisamente, bajo criterios de responsabilidad objetiva, atender siniestros propios del ámbito laboral, como las enfermedades profesionales. Por otra parte, si bien el artículo 184 del Código Laboral exige adoptar todas las



1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

medidas necesarias, lo que al parecer conferiría a la norma caracteres absolutos, no es menos cierto que ello está condicionado por factores tales como los recursos que se disponen, conocimientos, experiencias y el grado de avance tecnológico y científico en la prevención de enfermedades tales como, en la especie, la hipoacusia y a las medidas de control y fiscalización propias del poder de mando y directivo del empleador; pero en caso alguno puede extenderse a aquellos aspectos ajenos, tales como la susceptibilidad del propio trabajador, a sus conductas laborales y a otros aspectos ajenos que, dentro del ámbito del deber de protección, no es posible controlar ni prevenir. En consecuencia, desde el momento que su parte ha obrado con la esmerada diligencia y cuidado que le exige la culpa levísima, en los términos del artículo 44 del Código Civil, cumpliendo debidamente con las obligaciones que le impone el deber de protección legal, no puede aplicarse los parámetros propios de la responsabilidad objetiva para establecer un supuesto daño, cuya indemnización se pretende, toda vez que esta clase de responsabilidad se encuentra cubierta por el seguro social de la Ley N°16.744 y en su mérito el trabajador tiene derecho a las prestaciones médicas y pecuniarias que dicha ley le otorga. Y además, los daños que se solicitan indemnizar necesariamente requiere culpa y, al no haberla, según se demostrará, no puede ni deben sancionarse. Observa que lo que se pretende son indemnizaciones, esto es resarcimiento de presuntos



perjuicios. En consecuencia, en el hipotético caso que acogiera la presente demanda indemnizatoria, en caso alguno podría dar lugar a las sumas que se piden.

En cuanto al Daño Emergente. Esta indemnización no procede respecto de su representada, pues consiste en el detrimento patrimonial efectivo que experimenta la víctima con ocasión del hecho doloso o culposo, se trata de la lesión de un derecho que integra el patrimonio, vale decir importa en consecuencia un empobrecimiento real de quien sufrió el daño. Así, no es una obligación laboral susceptible de responsabilidad extracontractual. Sin perjuicio de lo anterior, siendo el daño un requisito indispensable de la acción indemnizatoria, correspondiendo la acreditación de su existencia y de su monto a quien lo alega. Resulta confuso sustentar una petición de esta naturaleza basado en los gastos que supuestamente el demandante debe incurrir para subsanar la pérdida de audición, como la compra de un audífono y pilas especiales. No existen antecedentes concretos que acrediten o puedan acreditar la producción de dicho daño y menos aún que ellos puedan ser atribuidos como responsabilidad de su representada. Además, el daño emergente definido como el empobrecimiento real y efectivo padecido por quien solicita la indemnización, no se condice con la solicitud del demandante, pues está pidiendo indemnizar el futuro,



eventual y posible daño que su patrimonio sufrirá, peticiones completamente fuera de contexto.

El criterio a tener en cuenta es la certeza de que el actor vaya a ver efectivamente menoscabado su patrimonio como consecuencia de la hipoacusia que da origen a estos autos. Dicha certeza deberá acreditarse puesto que cualquier incertidumbre atentaría contra la naturaleza jurídica del daño emergente, no pudiendo ser este una fuente de indemnizaciones frente a "probables perjuicios", lo cual necesariamente implicaría un enriquecimiento sin causa.

En cuanto al lucro cesante. Esta indemnización tampoco procede respecto de su representada, ya que esta clase de indemnización no es de origen laboral, pues consiste en la ganancia legítima que deja de percibir como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las obligaciones que impone el contrato a una de las partes, pero aun así no es una obligación laboral susceptible de responsabilidad extracontractual. Conforme al propio texto del libelo, lo que el actor demanda es el pago período que va desde el momento del término de la relación laboral hasta el momento de su jubilación a los 65 años. Por otra parte, el artículo 1.556 del Código Civil señala que "La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento."



Doctrinalmente, se ha señalado respecto a los requisitos de la indemnización de perjuicios, que: "la indemnización de perjuicios tiende a obtener un cumplimiento de la obligación por equivalencia, o sea, que el acreedor obtenga económicamente tanto como le habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación...".

De esta forma, los requisitos para que proceda la indemnización de perjuicios pretendida es: (1) la existencia de los daños; (2) que éstos sean ciertos; (3) que no hayan sido indemnizados y; (4) que hayan lesionado un derecho o interés legítimo. Es por ello que el daño debe ser real, efectivo y que tenga existencia material. Es en este punto, considerando que el lucro cesante es una legítima expectativa de ganancia, no puede dejarse de lado el requisito de la certeza, ni menos presumirla como ocurre en el caso de autos. Tan es así, que el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil obliga al juez a no dar lugar al pago "Si no resultan probados la especie y el monto de lo que se cobra, o, por lo menos, las bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia." Es claro entonces que el lucro cesante debe ser cierto y no una mera probabilidad, expectativa, ni menos indemnizar la pérdida de oportunidad, situación que parte de la base de una eventualidad de lo que podría haberse ganado u obtenido en el evento de no haber ocurrido el daño. En relación con el lucro cesante Carmen Domínguez Hidalgo, ha expuesto: "Se



trata de imaginarse cómo habrían sido las cosas de no haberse producido el daño. Pero no puede tratarse de una mera elucubración en base a simples chances, sino a una probabilidad cierta de ganancia, desde que el lucro cesante no deja de exigir como condición esencial el carácter de certeza que se exige de todo daño. De este modo, no basta al que la demanda acreditar probabilidades de ganancias, sino que deberá acreditar que existían ganancias esperadas.

Como se ha afirmado reiteradamente en la jurisprudencia chilena, debe demostrarse que existe una "probabilidad objetiva" y no sólo una mera posibilidad como ya se ha dicho. Por ese efecto de esa ausencia de prueba es que, en la práctica el lucro cesante no es indemnizado en muchos casos, en especial cuando afecta a las personas. De allí que no se haya admitido generalmente, demandadas basadas en el cálculo de probabilidades y de remuneraciones pretéritas...". En consecuencia, el demandante interpreta erradamente la certidumbre del daño que reclama y que conforme a ello es presumible concluir que existe una pérdida de ganancia después del término de la relación laboral, por lo que prescinde de que el daño sea cierto, real y efectivo, sustituyéndolo por una posible o una mera expectativa del mismo, lo que implica necesariamente que no se cumple el requisito de certeza del lucro cesante. Existe una clara confusión en cuanto al concepto de la certidumbre que se exige para el



1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

lucro cesante, de forma que el demandante considera, que la certeza se obtendría la ocurrencia del accidente, las secuelas que le produjo y la supuesta incapacidad que padece, la que no se indica el porcentaje cierto de pérdida de ganancia, número de resolución, fecha, ni institución que la declara. Esta circunstancia no es una prueba del lucro cesante, sino la prueba de lesiones físicas. La certeza del daño es un punto esencial para la procedencia de la reparación del lucro cesante, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil es el acreedor quien debe acreditar la probabilidad objetiva y no una mera posibilidad.

En consecuencia, en la reparación del lucro cesante deben considerarse las utilidades realmente probables y no las meramente posibles basadas en la estimación probable de vida laboral del demandante, no se puede establecer el pago de indemnizaciones sobre posibilidades que, aun en el supuesto de ser reales, que no lo son, los posibles daños que el actor señala en su demanda de manera alguna lo dejarían imposibilitado de ejercer una actividad remunerada. En el hipotético caso que se estime pertinente esta indemnización el demandante deberá acreditar el monto que supuestamente percibía mensualmente y bajo que título o respecto de que tipo de obligación lo recibía, pues no aporta ningún tipo de información al respecto que permitan a esta defensa tener argumentos que rebatir.



En cuanto a los montos que se pretenden por daño emergente y lucro cesante. Respecto de los montos pretendidos como indemnización de daño emergente y lucro cesante, el actor pretende una indemnización de \$1.390.000 y \$174.061.471 respectivamente. Estas indemnizaciones, son evidentemente excesivas y desproporcionadas, no obstante, los argumentos con los que el demandante pretende justificarla. Observa que lo que se demanda es una indemnización, esto es resarcimiento de presuntos perjuicios. Esta pretensión parte de un supuesto errado que es considerar que el demandante siempre trabajará en la misma actividad, puesto de trabajo, faena, hasta que cumpla la edad para pensionarse, argumento que carece de toda lógica, dado que es absolutamente imposible prever lo que le ocurrirá entre los 60 y 65 años de edad. Nadie puede asegurar, ni su expectativa real de vida, ni sus expectativas laborales, ni menos sus ingresos. Así, lo que se pide indemnizar no es lucro cesante sino una especie de "pérdida de oportunidad", concepto que es ajeno al demandado. En consecuencia, en el hipotético caso que se acogiera la presente demanda indemnizatoria, en caso alguno podría dar lugar a las sumas que se piden, toda vez que lo demandado no corresponde a daño emergente y lucro cesante.

En cuanto al daño moral. En consideración a que la responsabilidad perseguida es contractual, según se desprende del libelo de la demanda, la indemnización de daño moral es improcedente. En

1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

efecto, debe aplicar el artículo 1558 del Código Civil, de la responsabilidad contractual, pues en materia laboral no existe la institución del daño moral como perjuicio indemnizable, como tampoco existen normas especiales respecto de los efectos de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo. En consecuencia, se aplican supletoriamente las normas civiles. De acuerdo a lo anterior se debe tener presente entonces lo dispuesto en el artículo 1553 N° 3 del Código Civil que al tratar las obligaciones de hacer- como lo es la obligación de protección y cuidado contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo- admite la acción indemnizatoria de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato, siendo procedente entonces, la indemnización contenida en el artículo 1558 del Código Civil, norma que es clara y expresa al señalar que solamente en caso de dolo se indemnizan los perjuicios, lo que incluye el daño moral.

Es del caso que no es posible atribuir dolo a su representada puesto que, de acuerdo a la interpretación jurisprudencial del artículo 184 del código del ramo, la responsabilidad del empleador es equivalente a culpa levísima. Por lo tanto, en tal escenario no puede haber existido dolo de su representada, pues como se ha señalado no existe daño y en el hipotético caso de haberlo, dicha parte hizo todo lo posible por evitarlo al adoptar todas y cada una de las medidas de seguridad y protección a su alcance, en cuanto se lo permitió el avance de la



tecnología. Contractualmente para la procedencia del daño moral debe existir, además de daño, dolo, el que debe acreditarse en forma específica, teniendo en este caso la carga probatoria el actor, de acuerdo al texto contenido en el artículo 1558 ya citado. Por tanto, no procede indemnizar al actor por daño moral en la especie. En autos, además de no existir el incumplimiento alegado, no existe daño y el actor no imputa dolo a su representada, sin perjuicio de que, si invoca la norma del artículo 184 del Código del Trabajo, situación por lo menos contradictoria. Por tanto, será de cargo del demandante acreditar: • Que se desempeñó en minería subterránea para las empresas demandadas en las dependencias de Codelco Chile, en los periodos indicados. • Qué actividades ejerció en los periodos no trabajados en las dependencias de Codelco Chile, y también en los años previos a su ingreso como trabajador, en el entendido que su actividad laboral comenzó a los 18 años. • Que existió dolo o culpa por parte de su representada en los hechos que se demanda, lo que desencadenó que en la actualidad sufra de hipoacusia y que ella además sea de origen laboral.

En cuanto al monto que se pretende por daño moral. En la demanda la suma que se pretende por concepto de daño moral no es reparatoria. Por el contrario, del monto que se pide se advierte que se pretende lucrar o causar enriquecimiento al actor, aprovechándose del supuesto sufrimiento que le



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

causaría el hecho de ser enfermo profesional. En conclusión, respecto del juicio de autos el daño moral, al ser una indemnización que tiene un carácter reparatorio que obliga a que, de acogerse, su monto esté en relación con la situación particular del demandante, cuando ya han transcurrido más de 28 años desde el diagnóstico. Por ello jamás puede ser causante de lucro ni pretenderse que la eventual suma que se conceda cause o tenga el propósito de causar enriquecimiento. Es por ello que la suma pretendida, si llega a aceptarse, debe ser razonables o criteriosas.

Por lo expuesto, pide tener por contestada la demanda y rechazarla en todas sus partes con costas, acogiendo la excepción de prescripción extintiva de la acción. Si no se acoge esta excepción, rechazar la demanda pues no puede conocerse de ella en los términos propuestos por el actor y entonces, carece de fundamento ya que no concurre ninguno de los supuestos para dar por establecida la responsabilidad de su representada, toda vez que no ha actuado dolosamente ni con culpa o negligencia que la constituya responsable. Por el contrario, desde su creación ha adoptado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también ha proporcionado a todos sus trabajadores, y al demandante en particular, todos los implementos



necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

En subsidio de lo anterior, solicito que, si considerara que alguna de las indemnizaciones solicitadas es procedente pese a todos los antecedentes proporcionados, que sea rebajada prudencialmente a una cantidad que se condiga con los esfuerzos empleados por su representada para evitar la enfermedad profesional, con las dificultades innegables de erradicarla y las medidas de mitigación adoptadas, destinadas a paliar los efectos de la enfermedad.

TERCERO: Que en la audiencia preparatoria se llamó a las partes a conciliación sin resultados, se confirió traslado a la demandante quien solicitó el rechazo de la excepción de prescripción señalando que no sería el primer diagnóstico el que determina la prescripción sino desde el último diagnóstico. Por haber subido el nivel de incapacidad, estimando que la demandada yerra en la interpretación del cómputo de la prescripción.

Luego se fijaron como hechos no controvertidos y hechos a proar los siguientes:

HECHOS NO CONTROVERTIDOS:

1. Fecha de inicio y término el trabajador, esto es que ingreso a prestar servicios para la demandada el 19 de junio del año del año 1981 hasta el 21 de diciembre el año 2011.



HECHOS CONTROVERTIDOS:

1. Haber sido declarada al demandante la enfermedad profesional que indica, fecha de declaración y grado de incapacidad.

2. Daños o perjuicios sufridos por el demandante a consecuencia de la enfermedad profesional aludida en el punto anterior. En su caso, naturaleza de los perjuicios.

3. Haber adoptado la demandada las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador demandante mientras este laboraba en sus instalaciones.

CUARTO: Que la parte demandante en la audiencia de juicio incorporó los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL:

1. Certificado emitido por Marcela Cerda de fecha 20.10.14 que certifica los cargos en que se desempeñó el demandante en dependencias de la demandada.

2. Ord. 1283 de 11 de mayo de 1994 de la Comisión Medica Preventiva e invalidez Región Atacama.

3. Ord. 2232 de 20 de junio de 1997 de la Comisión Medica Preventiva e invalidez Región Atacama.



4. Ord. 4746 de 20 de diciembre de 1999 de la Comisión Medica Preventiva e invalidez Región Atacama.

5. Ord. 3804 de 05 de agosto de 2009 de la Comisión Medica Preventiva e invalidez Región Atacama.

6. Ord. 1988 de 10 de abril de 2014 de la Comisión Medica Preventiva e invalidez Región Atacama.

7. Ord. 1989 de 10 de abril de 2014 de la Comisión Medica Preventiva e invalidez Región Atacama.

8. Resolución N°B101/20140602 de 24 de junio de 2014 de la Comisión Médica de Reclamos.

9. Liquidaciones de sueldo del actor de abril, mayo, junio y diciembre de 2011.

10. Liquidación de pago de BBVA de fecha 08 de agosto 2014 por un monto de líquido \$259.894.

11. Resolución Exenta N°6484 de 31 de julio de 2014 del Instituto de Seguridad Laboral

12. Certificado de fecha 15 de septiembre de 2014 del Instituto de Seguridad Laboral.

13. Formulario para reclamos y apelaciones en contra de entidades fiscalizadas de fecha 15 de septiembre de 2014.



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

14. Ord PE N°3442/2014 de 01 de diciembre de 2014 de Instituto de Seguridad Laboral.

15. Notificación de deuda de prestaciones de seguridad social de fecha 04 de diciembre de 2014 de Instituto de Seguridad Laboral.

16. Evaluación Audiológica Médico Legal Peecca de fecha 05 de julio de 2016 del Hospital del Trabajador.

17. Informe Médico Achs de fecha 05 de octubre de 2010.

18. Receta médica de fecha 09 de enero de 2017 doctora Carolina Castillo Toro.

19. Boleta de fecha 17 de febrero de 2017 de la empresa Servicios Médicos Castillo Figueroa Ltda.

20. Impresión de pantalla de fecha 11 de julio de 2019 del sitio web www.casaroyal.cl/producto/pack-pilas-audifonos-dur312/ El tribunal tiene por incorporada la prueba documental, quedando en custodia de éste.

CONFESIONAL:

La parte demandante solicita hacer efectivo el apercibimiento legal, atendida la incomparecencia de la parte demandada.

TESTIMONIAL:



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

1. Previo juramento, don Alfredo Juan Barraza Cubillos, Cédula de Identidad N° 7.532.181-3, expone en los términos que constan en audio.

2. Previo juramento, doña Deisy Alejandra Barraza Acuña, Cédula de Identidad N° 15.028.386-8, expone en los términos que consta en audio.

Otros medios de prueba:

OFICIOS:

1. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. RUT, 76.265.736-8. Domicilio, Avda. Pedro de Valdivia N°100, Providencia., indicando los nombres de los empleadores y los periodos de tiempo en que se ha desempeñado el demandante hasta la fecha.

2. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), Subcomisión Atacama ubicada en calle Rodríguez N° 611, 1° piso, Copiapó, a fin de que remita al Tribunal copia autorizada de todas las Declaraciones de Evaluación de Invalidez por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del actor.

3. SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, domiciliada en Calle Huérfanos N° 1376, Santiago, a efectos de que informe si es que la demandada Codelco Chile detenta la calidad de administrador delegado del Seguro Social, y en la afirmativa si la mantenía a la época de prestación de los servicios del actor.



EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:

En la medida que consten en poder de la demandada.

a) Que la demandada exhiba las mediciones de ruido realizados en las faenas en las que se desempeñó el actor, esto es desde el 19 de junio de 1981 al 31.12.2011.

b) Que la demandada exhiba las evaluaciones de los puestos trabajo en los cuales se desempeñó el actor, esto es, desde 19 de junio de 1981 al 31.12.2011.

c) Que la demandada exhiba los antecedentes médicos, exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales realizados al actor durante el periodo que prestó servicios para la demandada, desde 19 de junio de 1981 al 31.12.2011 en cuanto a la audición.

d) Que la demandada exhiba comprobantes de entrega de elementos de protección personal otorgados al actor y debidamente suscritos por el actor. Específicamente los comprobantes de entrega de EPP referente a protectores auditivos otorgados al actor y debidamente suscritos por este.

e) Que la demandada exhiba el programa de recambio de los EPP, específicamente el de protectores auditivos, entregado, informado y debidamente suscrito por el actor.



f) Que la demandada exhiba la matriz de riesgos a los que estaba expuesto el actor, en especial a ruido, en las faenas en las cuales se desempeñó, y debidamente recibido por el actor.

La parte demandante solicita hacer efectivo el apercibimiento legal.

PERITAJE:

Previo juramento, don Francisco Javier Álvarez Bello, Cédula de Identidad N° 12.053.365-7, según el contenido que consta en audio.

QUINTO: Que la parte demandada no incorporó prueba al juicio.

SEXTO: Que la prescripción ha sido definida como "un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenas, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales", así, en la prescripción extintiva "lo que cuenta es la inactividad del acreedor, que resulta así sancionada ante la alegación del deudor que se ampara en ella para oponerse a toda pretensión de cumplimiento del acreedor" (Domínguez Águila, Ramón, La prescripción extintiva, Doctrina y Jurisprudencia, pág. 22), como recuerda Díez-Picazo en palabras de Bartolo la prescripción extintiva funciona odio negligentiae.



Según lo razonado entonces, corresponde determinar el lapso de tiempo durante el cual pudieron ser ejercidas las acciones por el actor -supuesto acreedor- y el hecho que pudo eventualmente generar la obligación que se demanda, siendo en este último caso, la responsabilidad de la demanda por el incumplimiento del deber de seguridad que habría generado en el demandante la enfermedad profesional consistente en hipoacusia que ampara su pretensión.

SEPTIMO: Que en lo relacionado con el lapso de tiempo exigido por la ley para el ejercicio de las acciones, en la materia que nos convoca al presente juicio, se encuentra regulada por normas de carácter especial de la ley 16.744, Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que a diferencia del derecho común, para su computo, según prescribe el artículo 79 dispone que "Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad, correspondiendo entonces establecer la fecha de inicio del pretendido hecho generador de la responsabilidad y si entre aquel y la demanda transcurrió el plazo extintivo.

OCTAVO: Que del examen de la pretensión del actor se ha señalado que el fundamento de su pretensión es la hipoacusia que habría sido diagnosticada a su respecto, enfermedad que sería de naturaleza



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

profesional según la declaración, refiriéndose que mediante resolución de 12 de abril de 1991 se diagnosticó a don Manuel Humberto Barraza Cubillos hipoacusia, cuestión que aparece suficientemente probada por la demandante con el documento incorporado en juicio, consistente en copia de Ordinario 1066 emanado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de salud de la Región de Atacama. Que el examen de la demás documental incorporada se constata que según resolución 1434 de 14 de octubre de 1994 se determinó la inexistencia de neumoconiosis e igualmente con fecha 27 de septiembre de 1994, frente a una revisión de los antecedentes de hipoacusia se mantuvo el porcentaje de incapacidad permanente, no apareciendo ningún antecedente vinculado con algún nuevo diagnóstico, reiterándose una solicitud para modificar el porcentaje de incapacidad, agregándose una nueva enfermedad -silicosis- cuestión rechaza por resolución 703 y 704 de 28 de mayo de 1997.

Que mediante resoluciones 2246 de 17 de noviembre de 199 y 1545 de 15 de junio de 2005, 2891 de 8 de agosto de 2007 (ratificada por Resolución B101/2008267 de 2 de abril de 2008), 3804 de 5 de agosto de 2009, 1988 de 10 de abril de 2014, todas resoluciones que basadas en la hipoacusia diagnosticada en Resolución 1066 de 12 de abril de 1991, solo constituyendo antecedentes relacionados con modificación de porcentaje de incapacidad.

NOVENO: Que conjuntamente con las resoluciones precitadas, mediante Resolución 1989 de 10 de abril de 2014 se sumó a la revisión sensorio auditiva los diagnósticos de discopatías cervical y lumbar multinivel y síndrome lumbar y cervical crónico secundario, decretándose una incapacidad de 13,7% ponderado por las recién citadas patologías, dando un total de 50% de pérdida de capacidad de ganancia, resolución que mediante Resolución B101/20140602 de 24 de junio de 2014 modificó el porcentaje establecido por la resolución 1989 de 10 de abril de 2014 señalando que la patología de columna es de origen común, decisión que fue ratificada por ordinario 21122 de 7 de abril de 2015 que ratificó lo obrado en resolución de 24 de junio de 2014 recién citada.

DECIMO: Que lo expresado en el considerando precedente da cuenta que en todas las resoluciones dictadas durante el año 2015 y 2015 que se han citado no obra ningún antecedente que se hubiere modificado el diagnóstico de hipoacusia ni agregando una nueva patología sino solo del intento por el actor de obtener una declaración de otras patologías asociadas a la hipoacusia siendo infructuoso dicho esfuerzo por cuanto se estimó que las discopatías cervical y lumbar multinivel y síndrome lumbar y cervical crónico secundario, constituían enfermedades de origen común.

UNDECIMO: Que para la acertada resolución de la excepción de prescripción debe precisarse que en todas las resoluciones singularizadas en los



considerandos anteriores nunca se modificó el diagnóstico del año 1991 correspondiente a hipoacusia neurosensorial, sino que se limitaron a establecer diversos porcentajes de incapacidad, por lo que la fecha de inicio de computo de la prescripción corresponde al 16 de marzo de 1991, día posterior a la dictación de la resolución 221, transcurriendo entre el diagnóstico de hipoacusia neurosensorial y la fecha de notificación de la demanda aproximadamente 28 años por lo que se estima que concurren los supuestos de hecho contemplados por el artículo 79 de la Ley 16.744, pues en efecto ha transcurrido en exceso el plazo de 5 años contados desde el diagnóstico de la hipoacusia neurosensorial, resultando irrelevante para las posteriores resoluciones administrativas vinculadas con solicitudes y decisiones que alteraron el porcentaje de incapacidad, siempre, vinculado con el diagnóstico primigenio de hipoacusia, por lo que se acogerá la excepción de prescripción opuesta por Codelco Chile.

DUODÉCIMO: Que sin perjuicio de lo razonado por parte de este sentenciador en los considerandos precedentes, la parte demandante ha señalado que para el cómputo de la prescripción debe ser considerado el último aumento en el porcentaje de incapacidad, cuestión que se produciría el año 2014, lo que no resulta efectivo al analizar la Resolución Exenta N° 1988 de 10 de abril de 2014, y oficio remitido mediante ordinario 906/2019 del Presidente del Compín Atacama, en que consta que mediante la



expresada resolución no se modificó NI EL DIAGNOSTICO ni el porcentaje de incapacidad existente a solicitud de la demandada Codelco Chile formulada el año 2011, teniendo presente que la declaración anterior al año 2014 corresponde a Resolución B101/20101070 que ratificó resolución N° 3805 de 3 de agosto de 2009, de manera que aún el planteamiento de la demandante señalado al contestar el traslado conferido de la excepción de prescripción, debe ser rechazado pues, a lo menos transcurrieron 8 y medio entre la última "modificación" del porcentaje de incapacidad correspondiente a la hipoacusia y la notificación de la presente demanda.

DECIMO TERCERO: Que no se hará efectivo ninguno de los apercibimientos solicitados, atendido lo que se ha razonado en lo precedente y estimado que la exhibición de documentos solicitada y aún la confesional requerida no habrían de resultar conducentes a modificar la decisión sobre la excepción de prescripción que se acogerá.

DECIMO CUARTO: Que se omitirá pronunciamiento del fondo de la cuestión debatida atendido los alcances de la excepción de prescripción que se acogerá.

DECIMO QUINTO: Que la demás prueba rendida por la demandante no ponderada singularmente no altera las conclusiones que llevan a acoger la excepción de prescripción.



DECIMO SEXTO: Que se condenará en costas a la parte demandante atendidos la evidente pertinencia de la excepción opuesta, estimándose que no ha tenido motivo plausible para litigar oponiéndose a la prescripción alegada persistiendo en la sustanciación de un juicio en que aparecía evidencia la presencia del señalado modo de extinguir las obligaciones esgrimidas como defensa, cosas que se regulan prudencialmente teniendo en consideración la cuantía del juicio, la mayor o menor dificultad de la defensa sustentada por Codelco Chile, el número y extensión de las audiencias a la que compareció la demandada, fijándose en la suma equivalente en pesos a MEDIO ingreso mínimo remuneracional.

Y visto lo dispuesto por los artículos 79 de la Ley 16.744, 1, 184, 452 y siguientes del Código del Trabajo se declara que:

I. Se acoge la excepción de prescripción opuesta por Codelco Chile en contra del demandante don Manuel Humberto Barraza Cubillos, ambos ya individualizados, con costas.

II. Que se omitirá pronunciamiento sobre la cuestión de fondo atendida la excepción de prescripción que resulta acogida.

III. Que se condena en costas a la parte demandante las que se regulan en la suma equivalente en pesos a MEDIO Ingreso mínimo remuneracional.



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Regístrese, notifíquese y archívense los autos
en su oportunidad.

RIT : O-3731-2019

RUC : 19- 4-0191825-9

**Pronunciada por don FELIPE ANDRES NORAMBUENA
BARRALES, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago.**

En Santiago a treinta de marzo de dos mil veinte,
se notificó por el estado diario la sentencia
precedente.

